

EL MUNDO
GRUPO UNIDAD EDITORIAL

DIRECTOR:
DAVID JIMÉNEZ.

DIRECTORES ADJUNTOS: Agustín Pery (Información), Ignacio Gil (Suplementos), Pedro G. Cuartango (Opinión).

ADJUNTA AL DIRECTOR: Virginia P. Alonso (Digital).

DIRECTOR DE ARTE: Rodrigo Sánchez.

PRESIDENTE DEL CONSEJO EDITORIAL: Jorge de Esteban.



PRESIDENTE:
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.

VICEPRESIDENTE: Giampaolo Zambelletti.

DIRECTOR GENERAL: Javier Cabrerizo.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICACIONES: Aurelio Fernández.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Jesús Zaballa.

DIRECTOR DE PUBLICIDAD:
Gonzalo Casas.

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.
EDTA: Unidad Editorial Información General, S.L.U.

El Gobierno no cumple con el déficit y deja una pesada herencia

LA REALIDAD es que el Gobierno de Mariano Rajoy, el de los recortes y la austeridad, no ha conseguido cumplir con el objetivo de déficit comprometido con la Comisión Europea en ningún ejercicio de la legislatura. Por unas razones, como la herencia recibida del Gobierno de Zapatero en un primer momento, o por otras, como el descontrol de las cuentas en algunas comunidades autónomas, el Ejecutivo ha sido incapaz de encarrilar las finanzas públicas. Así, lo pactado con Bruselas era que el déficit público terminara el año 2015 en el 4,2% del PIB y se ha desviado casi un punto, hasta el 5,16%.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones, desglosó ayer el resultado del ejercicio: han cumplido la Administración Central –desfase del 2,68% del PIB frente al 2,9%– y las corporaciones locales, que han registrado un superávit del 0,44% cuando el objetivo era que cerrara el ejercicio sin déficit ni superávit. En el lado contrario, la Seguridad Social ha registrado un déficit del 1,26% del PIB y las comunidades autónomas, del 1,66% del PIB, más del doble de lo previsto.

El análisis de estas cifras muestra la incapacidad de las autonomías para cumplir con sus compromisos de ajuste fiscal. Es llamativo que sólo tres gobiernos regionales –los de Canarias, Galicia y el País Vasco– hayan sido capaces de embriar sus cuentas. Del resto, destaca Cataluña como

la región más despilfarradora al cuadruplicar su objetivo de déficit. A pesar de que el responsable último del cumplimiento es el Gobierno central, la Generalitat debería dar explicaciones y, en lugar de seguir culpando a Madrid de sus penurias económicas, elaborar un plan económico para reconducir esta situación, que perjudica a todos los españoles.

Pero el descontrol de las cuentas autonómicas tiene una explicación coyuntural. Por un lado, se debe a algunos gastos no recurrentes –es decir, que no se repetirán en el futuro–, por otro, en 2015 se celebraron elecciones regionales y ya se sabe que esto supone desvíos en los presupuestos. Aunque las comunidades autónomas son reincidentes en sus incumplimientos, revertir la situación depende de la voluntad política de sus dirigentes.

En cambio, es más preocupante, por ser más estructural, el déficit de la Seguridad Social. Porque ha aumentado respecto a 2014 y porque se ha producido con un crecimiento muy notable del PIB y tras la creación de más de medio millón de puestos de trabajo. Que ni en estas condiciones favorables se consiga, no ya equilibrar las cuentas, sino ni siquiera reducir el desfase, indica hasta qué punto la Seguridad Social necesita un replanteamiento en profundidad de sus presupuestos para actuar sobre todo en el control del crecimiento del gasto, ya que poco se puede hacer para lograr un incremento de ingresos adicionales.

El Gobierno, pues, no puede darse por satisfecho con el cierre fiscal del año pasado. Así se lo recordó ayer el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, a quien el Ejecutivo había acusado de alarmista meses atrás cuando expresó sus dudas sobre las cuentas españolas. «Los datos publicados –afirmó Moscovici– confirman las preocupaciones de la Comisión Europea sobre la trayectoria presupuestaria de España, tal y como lo expresamos en la opinión que adopta-

mos el pasado mes de octubre». Recordemos que el Ejecutivo mantuvo hasta el final, y así lo afirmó el PP en la campaña electoral de diciembre, que cumpliría con Bruselas. De todas formas, la Comisión no se pronunciará oficialmente hasta el próximo mes sobre los esfuerzos fiscales del Gobierno español.

El dato positivo de ayer fue que se ha conseguido detener la expansión de la deuda pública, que quedó el año pasado en el 99% del PIB, tres décimas menos que en 2014.

La principal consecuencia del incumplimiento del Gobierno es que el Estado español tendrá que hacer un ajuste total de 24.000 millones de euros en 2016 para lograr el objetivo de déficit del 2,8% del PIB. Es una herencia demasiado pesada para el próximo Gobierno que, sea del color que sea, tendrá que dejar de lado cualquier veleidad presupuestaria.

Perseguir la ortodoxia en las cuentas públicas debe ser el punto de partida de cualquier negociación de los partidos de cara a formalizar el nuevo Ejecutivo, porque ni Bruselas ni los mercados entenderían en estos momentos unos Presupuestos expansivos, como pretende Podemos, que lo único que harían es entorpecer el crecimiento y ralentizar la creación de empleo.



El próximo Gobierno deberá plantear un ahorro de 24.000 millones este año

La piratería intelectual sigue en niveles máximos

España es uno de los países de Europa con mayor piratería intelectual, según los estudios realizados por las asociaciones de contenidos. Ayer la SGAE, Cedro, Promusicae, la Liga de Fútbol y otras entidades presentaron un informe en el que se concluye que el 87% de los accesos digitales a series, videojuegos, libros y grabaciones musicales fueron ilegales el año pasado.

Hay que señalar que la cifra es engañosamente alta porque el mismo usuario puede acceder repetidamente al mismo contenido, pero, hecha esta salvedad, los datos indican que el pirateo digital es un uso habitual entre los consumidores españoles y que existe una filosofía que lo justifica.

Este informe concluye que el porcentaje de ciudadanos que accedió ilícitamente a contenidos en internet subió al 63% el año pasado, cin-

co puntos más que el anterior. El lucro cesante por esta práctica ascendió a 1.600 millones de euros, según este estudio, que evalúa que la piratería generó la pérdida de 21.000 puestos de trabajo en nuestro país.

Estas estadísticas han sido puestas en cuestión por las entidades que defienden a los usuarios de las redes digitales, pero no parece exagerado concluir que, efectuadas las correcciones pertinentes, la piratería en España es alta, superior a la de los países de nuestro entorno.

Ello corrobora el fracaso de la última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor al comenzar 2015. A lo largo del año pasado en España se cerró una web por ofrecer descargas ilegales, mientras que en Portugal se clausuraron más de 200 en el mismo periodo.

Todos tenemos constancia de que existen webs ilegales que actúan con impunidad, sea porque el procedimiento establecido en nuestro ordenamiento es inoperante o porque la realidad tecnológica evoluciona mucho más deprisa que los legisladores.

La propia Hacienda es una de las más perjudicadas porque dejó de ingresar una cantidad

cercana a los 500 millones de euros por la práctica del pirateo de los contenidos, que afecta no sólo a la industria editorial y los sellos discográficos sino también a la Liga de Fútbol, cuyos derechos son vulnerados, por ejemplo, por webs ilegales que operan desde otros países.

Pero el verdadero perjuicio de las descargas y los accesos ilegales se produce sobre los autores, cuyo trabajo es expoliado. Si a nadie se le ocurre entrar a un comercio y no pagar por la mercancía que se lleva, muchos consumidores consideran justificado piratear un libro o una película con el argumento de que los contenidos son caros o que ya cotizan por su conexión a internet.

Es evidente que hay que reforzar la ley y buscar procedimientos que permitan actuar de forma inmediata contra las webs ilegales o contra quienes hacen un negocio de los contenidos que otros generan, como nos sucede a los medios de comunicación. Y ello sin mermar la libertad de información, que nos parece un valor esencial a preservar. Pero esa libertad debe ejercerse en el marco de la ley porque en ninguna democracia se puede consentir que unos se aprovechen del trabajo de otros sin ningún escrúpulo.

Déficit récord en Cataluña

● Acapara ya un tercio del 'agujero' presupuestario de todas las autonomías ● El saldo negativo de la Seguridad Social superó en 3.000 millones el de 2014, pese a la creación de medio millón de empleos

FRANCISCO NÚÑEZ MADRID

Las administraciones públicas registraron en 2015, en el mejor año para la economía y el empleo de la crisis, la mayor desviación de déficit de la legislatura. Nadie, ni siquiera Bruselas, se esperaba que el incumplimiento del objetivo de déficit superara en un punto (unos 10.800 millones de euros) hasta el 5,16% del PIB frente al 4,2% del año anterior.

En realidad, el Gobierno no ha cumplido en un sólo año de legislatura con el objetivo previsto. Pero ésta ha sido la mayor desviación pese a recaudar un 5% más por impuestos tras la aplicación de la reforma fiscal en un sólo ejercicio.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, culpabilizó a las CCAA, en particular a Cataluña y también a la nueva gestión de la Comunidad Valenciana, de esta importante desviación del objetivo de todas las administraciones. En concreto, casi un tercio del agujero total de las autonomías en este año (cerca de 18.000

tas últimas cifras se podrían haber compensado con los resultados del Estado y ayuntamientos, pero los saldos negativos de las autonomías se han duplicado con creces sobre el objetivo previsto.

Es decir, la previsión de las CCAA era del 0,7% y han acabado con un 1,66%. Lo que supone una desviación de un punto. Deberían haber acabado el año con un agujero conjunto de unos 7.500 millones y ha acabado con esos casi 18.000.

Cataluña registró la mayor desviación. Su desequilibrio llegó al 2,7% de su PIB frente al 0,7% comprometido. Es decir, debía acabar el año con un déficit de unos 1.400 millones y lo concluyó con 4.100 más, hasta los 5.500 millones. El agujero catalán es similar en términos de PIB al registrado en 2014 (2,74%), pero es superior al de 2012 (2,26%) y 2013 (2,13%).

También Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y Aragón superaron con creces el 2%, el triple del objetivo. Sólo Canarias, Galicia y País Vasco cumplieron el objetivo.

Por ello, y a instancias de Bruselas, que por primera vez ha exigido al Gobierno que se cumpla la Ley de Estabilidad, el Ejecutivo en funciones reclamará ahora por carta la aplicación de la primera parte del artículo 65 que exige llegar a un acuerdo con Hacienda de no disponibilidad de créditos que permita garantizar que, con los nuevos recursos que reciban del

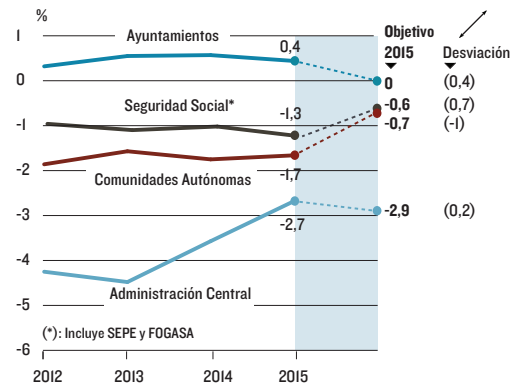
Estado, cumplirán la regla de gasto. Esa regla determina que en 2016 sus presupuestos no podrán aumentar más del 1,8% que es el crecimiento potencial de la economía. Montoro descartó la aplicación del punto segundo de ese artículo 65 que determina que las CCAA incumplidoras tiene que depositar el 0,2% de su PIB en una cuenta del Banco de España hasta que vuelvan a la senda fijada déficit. También desmintió que se pretenda intervenir a las comunidades que incumplan permanentemente sus compromisos así como sus cuentas según establece esa Ley.

Este inesperado resultado deja al próximo equipo gubernamental una herencia que tendrá que saldar con un ajuste presupuestario superior a los 10.000 millones netos en 2016 para alcanzar a fin de año con el objetivo del 2,6% previsto. En todo caso, Montoro, suavizó este legado diciéndole que «la herencia que se deja es una economía en crecimiento y de creación de empleo». «Es mucho

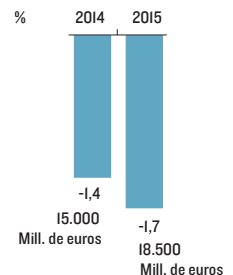
EL DÉFICIT EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA

Datos redondeados en % del PIB

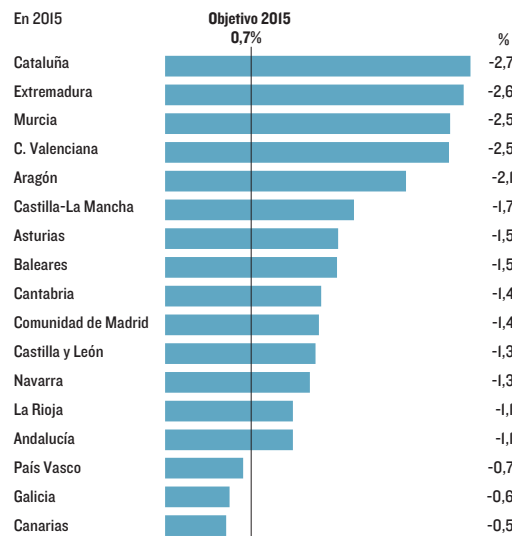
● POR ADMINISTRACIONES SIN AYUDA FINANCIERA



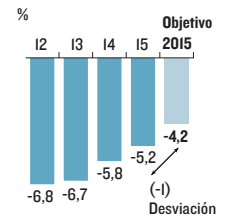
● SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL



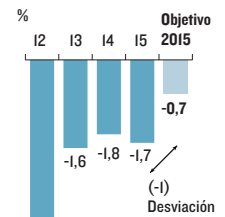
● EL AGUJERO DE LAS CC.AA.



● CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



● TOTAL CC.AA.



FUENTE: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

M. Vaquero / EL MUNDO



Cristóbal Montoro. REUTERS

El desvío de 10.000 millones exigirá un severo ajuste del futuro Gobierno

millones) es catalán (5.526 millones). Por si fuera poco, cuatro cada 10 euros del total de la desviación autonómica (10.440 millones) se deben también a Cataluña (4.100 millones), inmersa ese año en elecciones y en el proceso soberanista.

Según los datos de Montoro, la Administración central cerró el ejercicio con un saldo negativo del 2,7% del PIB frente al 2,9% previsto. Por su parte, los ayuntamientos registraron un nuevo superávit del 0,44%, aunque es más bajo que el del año anterior (0,57%). Mientras, la Seguridad Social (junto a Sepe y Fogasa) registró un déficit del 1,26% frente al 0,6% previsto. Según el ministro, es

más fácil reducir el déficit en crecimiento que con la economía cayendo», advirtió.

En este sentido, el Gobierno considera que esos 10.000 millones se podrían conseguir si se mantiene el crecimiento económico al aumentar los ingresos. Sin embargo, algo similar se ha producido en 2015 y el crecimiento no ha sido suficiente para cumplir el objetivo.

Salvo que Bruselas acepte flexibilizar el objetivo de 2016, España deberá pasar del 5,2% de déficit de 2015 al 2,8% comprometido. En números redondos supone un ajuste grueso (ingresos y gastos) de 24.000

millones. Pero, el Gobierno ya ha incluido en los Presupuestos del Estado un aumento de la financiación autonómica de unos 10.000 millones por la liquidación del sistema de 2014, ya que en ese año la economía creció más de lo previsto y también los ingresos. Además, en 2016 no aparecerán los más de 3.500 millones extra que han surgido en 2015 para cubrir los gastos de la hepatitis C y las facturas que ha habido que computar de 2013 del Ayuntamiento de Zaragoza y de obras de Cataluña. Por tanto, el ajuste neto a realizar es de esos 10.000 millones.

El desbocamiento del déficit de

2015 ha destapado otro problema importante. El déficit del sistema de la Seguridad Social (sin Sepe y Fogasa) volvió a crecer exponencialmente. Llegó al 1,71% (18.500 millones) frente al 1,44% del año anterior (15.000 millones). Lo que significa que con 525.000 empleos más en ese año el déficit ha aumentado en 3.000 millones más. Se debe a la baja calidad del empleo y de los bajos sueldos. Montoro señaló que la próxima reforma fiscal debería contemplar la posibilidad de que el Estado financie al sistema de pensiones por primera vez con la caja de impuestos porque las cotizaciones son insuficientes.



HOJA DE RUTA

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

¿Qué viene la hepatitis?

El déficit en 2015 ha supuesto un abultado borrón en la que se supone que es la mejor asignatura de este Gobierno: la gestión económica. El compromiso de España con Bruselas era rebajar el desequilibrio presupuestario al 4,2% del PIB, pero la cruda realidad lo ha elevado al 5,16%. Es decir, 10.000 millones más de lo previsto. El agujero de las administraciones públicas supuso, por tanto, 56.608 millones de euros.

Y ello en un año de crecimiento económico récord (por encima del 3%), en el que la caída de los gastos financieros, la reducción de la partida destinada a subsidio de desem-

pleo, el buen comportamiento de las administraciones locales y el ahorro por la caída de los precios del crudo deberían haber ayudado a cumplir con relativa comodidad una meta que el propio Gobierno ha mantenido, hasta hace pocas semanas, que alcanzaría.

La responsabilidad de ese descuadre, que ha provocado una primera reprimenda de Pierre Moscovici, fue atribuida ayer por el ministro Cristóbal Montoro a las Comunidades Autónomas ya la seguridad social.

En efecto, las autonomías duplicaron en 2015 el déficit previsto, destacando entre ellas Cataluña y Valencia (comunidad gobernada por el PP hasta el pasado verano). El titular de Hacienda presumió de los buenos resultados de la Administración central del Estado, como si los desequilibrios autonómicos no fueran cosa suya.

El déficit es responsabilidad del Gobierno. Una de las razones por las que Bruselas ha lanzado un mensaje de advertencia al Gobierno español ha sido precisamente la falta de planes concretos y creíbles para ajustar el déficit de las Comunidades Autónomas.

Sin duda, en algunos casos ese incumpli-

miento puede estar trufado de razones políticas, como en el caso de Cataluña, pero en la mayoría lo que se ha puesto de manifiesto es que el sistema de financiación no ha cumplido sus objetivos. Lo demuestra el hecho de que entre las incumplidoras hay comunidades de todos los colores políticos.

Las razones por las cuales la Administración central ha cumplido con creces y las autonómicas no, tienen que ver más con la insuficiencia financiera que con el despilfarro, la corrupción o los proyectos de construcción nacional. Ése es un problema que el Gobierno no ha sabido resolver y, por ello, los números no han sido tan brillantes como cabía esperar.

Algo parecido sucede con la seguridad social. El desajuste era perfectamente previsible y, por tanto, el objetivo muy difícil de cumplir.

El Gobierno se ha dejado llevar por criterios políticos y no ha querido asumir el coste de ajustar las pensiones. De hecho, el ministro se jactó ayer de que en España «no se han

bajado». Pues bien, si se pretenden mantener en sus niveles actuales, el Fondo de Reserva se quedará seco en un par de años y entonces habrá que buscar una solución de urgencia.

El complejo que ha generado la dura política de ajuste que tuvo que aplicar el Gobierno durante los primeros dos años de legisla-

tura ha hecho que se produzcan situaciones curiosas. Al comenzar su rueda de prensa ayer, Montoro argumentó que una de las principales razones por las que el déficit se ha disparado en 2015 han sido los 1.000 millones que hubo que destinar a financiar el medica-

mento para la hepatitis.

Naturalmente ese gasto había que hacerlo, pero en un año en el que la economía española estuvo a la cabeza del crecimiento entre los países de la UE, esa partida debería haber sido perfectamente absorbida por el Presupuesto. No quiero imaginarme lo que hubiera sucedido si en lugar de crecer al 3% estuviéramos en plena recesión.

El sistema de financiación a las autonomías no ha logrado su objetivo



El comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici. AFP

Indignación en las CCAA por las acusaciones de Montoro

MARÍA TERESA COCA BARCELONA

El Govern de la Generalitat rebatí ayer la acusación del ministro Cristóbal Montoro, al que atribuyó «mucha intencionalidad política» al apuntar como causante del disparo del déficit a las finanzas catalanas. Desde el Departamento de Economía, que lidera el también vicepresidente del Gobierno catalán, el republicano Oriol Junqueras, se argumentó que el déficit de Cataluña en 2015 se hubiera situado en el 1,7% del PIB catalán –y no del 2,7%– si el Estado no hubiese imputado los gastos correspondientes a infraestructuras (prisiones y carreteras) licitadas antes de 2010 por 1.318 millones y si Cataluña no hubiese tenido que asumir el coste de la vacunación de la hepatitis C.

En su defensa, fuentes del área de Economía también añadieron que el Estado ha impedido por la vía de los recursos al Tribunal Constitucional el impuesto catalán de depósitos bancarios en detrimento del impuesto estatal, por lo que la recaudación esperada ha sido mucho menor a la esperada, y tampoco se han recibido recursos por el Fondo de Competitividad o por la disposición adicional tercera del Estatuto.

Otras autonomías indignadas con las acusaciones de Montoro han sido Castilla y León, desde donde dijeron que «si hubiera otro reparto entre Estado y comunidades», habrían cumplido. Además, señalaron que su incumplimiento obedece, entre otras razones, al desembolso en tratamientos contra la hepatitis. Andalucía, igualmente, mostró su desacuerdo con la imputación «arbitraria» de algunos gastos que le han impedido cumplir el objetivo de déficit.

Quemando puentes con Bruselas

La UE muestra su preocupación por los datos de déficit publicados por el Gobierno español

PABLO R. SUANZES BRUSELAS
CORRESPONSAL

«Los datos publicados confirman las preocupaciones de la Comisión sobre la trayectoria presupuestaria de España, tal y como se expresó en las conclusiones que adoptamos en octubre pasado sobre el proyecto de Presupuesto de España». La mezcla de satisfacción y rabia contenida que desprendía el comunicado de ayer del comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, resume bien la posición de Bruselas sobre el déficit español.

Durante todo un año, el Gobierno español defendió una y otra vez que los objetivos de déficit pactados con la UE (un 4,2% en 2014 y un 2,8% del PIB en 2016) se iban a cumplir sin problemas. Que el crecimiento de la economía era mucho más de lo previsto, que la recaudación iba como un tiro y que la acti-

vidad había resucitado. Lo juraba Guindos en cada Eurogrupo. Pero en Bruselas nunca lo creyeron. España ha incumplido los objetivos sistemáticamente desde 2008 y esta vez, aseguraban, no iba a ser diferente. Y tenían razón.

En octubre, España provocó un incidente casi diplomático con la Comisión Europea al cargar contra Moscovici. Formalmente Madrid tenía razón: el comisario habló antes de tiempo y criticó con especial dureza a Moncloa sin necesidad, o eso parecía. Pero sus argumentos eran más que sólidos: los números no cuadraban, España estaba gastando mucho más de lo que ingresaba, las reformas se habían parado, las CCAA no estaban bajo control y aunque el efecto de la rebaja de impuestos no estaba siendo tan negativo en la recaudación como se temía, había un impacto.

La posición de España resulta muy difícil de entender en Bruselas. La economía crece por encima del 3%, se está creando empleo, se aprobaron reformas que se usan como plantilla para leer la cartilla a vecinos como Francia e Italia. España era la alumna aventajada, la demostración viva de que la combinación de esfuerzos y ajuste fiscal funciona. Y no comprendían por qué el Ejecutivo había decidido cambiar de rumbo.

Bueno, entender lo entendían. El peso de las elecciones era evidente. En la decisión de la rebaja de impuestos, en la devolución de la paga extra a los funcionarios y en el incremento del gasto y la contratación pública. Lo escribían clarísimo en cada uno de los informes que se han publicado sobre España, y raro es el mes que no haya uno.

Que un país intente conseguir flexibilidad es habitual. La guerra

ahora mismo con París. Roma o Viena es muy fuerte. Pero la forma de hacerlo de España, un país que crece al doble que la media y al triple o más que las grandes economías, decepciona. E irrita cuando lo convierte en un asunto de Estado y usa al cuerpo diplomático para cargar contra un comisario por ser francés o ser socialista.

Moscovici y seguramente el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, creen en realidad que un desvío del déficit no es malo para la economía, no al menos durante una recuperación débil. Saben que España ha hecho muchísimo. Pero hay normas y romperlas de forma unilateral está por encima del nivel de tolerancia.

Bruselas siempre tiende la mano. Si España quería flexibilidad la hubiera acabado encontrando, pero no por las malas y quemando puentes.

ECONOMÍA | DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO LAS REACCIONES

Déficit de credibilidad

JORDI SEVILLA

La gestión económica del Gobierno de Rajoy se está deshaciendo como un castillo de naipes que cayera sobre las espaldas de los ciudadanos, ensombreciendo el futuro de España. El último dato conocido es la importante desviación del déficit público del conjunto de las Administraciones durante 2015. Ahora resulta que no somos los alumnos aventajados de Europa, como pretendían, sino que estamos en el vagón de cola de la Eurozona en paro, déficit, crecimiento de la deuda pública y, por supuesto, corrupción.

En primer lugar, debemos constatar la sensación generalizada, aquí y en Europa, de que el Gobierno ha estado engañando con las cifras reales de las cuentas públicas: cuando rebajó electoralmente el IRPF aduciendo la buena marcha del déficit; cuando en enero el ministro De Guindos aseguró en el Ecofin que cumpliríamos con total seguridad el objetivo fijado o cuando el mes pasado, Rajoy reconoció una ligera desviación de tres décimas.

En segundo lugar, sorprende una desviación de un punto porcentual, en plena expansión continuada de la economía. El Gobierno ha buscado explicaciones en algunos gastos imprevistos, pero ha ocultado que para eso precisamente se creó el Fondo de Contingencia y, sobre todo, que también ha tenido ingresos imprevistos ya que el Presupuesto para 2015 se elaboró a partir de un crecimiento estimado del 2%, muy inferior al que ha resultado finalmente.

En tercer lugar, ante la desviación producida en 2011, el Gobierno entrante de Rajoy echó toda la culpa al anterior Gobierno de Zapatero cuando ahora, en una situación similar, le echa la culpa a las Comunidades Autónomas olvidando, entre otras cosas, que entonces se produjo una caída no prevista del PIB que hundió, de manera directa, los ingresos públicos, junto a elevaciones reiteradas de los tipos de interés de la deuda; mientras que ahora las desviaciones en crecimiento son al alza y nos financiamos a tipos negativos como consecuencia de la nueva política monetaria del BCE.

Cuando se conocen los datos por niveles de administración, resulta difícil no detectar la responsabilidad directa de las desviaciones actuales en el Gobierno central y en su política electoralista, en una año con elecciones autonómicas y generales. Es decir, en su

afán por anteponer los intereses de partido sobre los intereses generales del país. Es llamativo que el déficit del Gobierno central, Administración General del Estado más Seguridad Social, aquel sobre el que es directamente responsable el Gobierno Rajoy, se haya incrementado un punto a lo largo de la legislatura: Montoro recibió de Salgado un déficit del 3,1% del PIB y entrega a su sucesor otro del 4%, del que destaca el aumento del desequilibrio en la Seguridad Social (a pesar de la laminación del Fondo de Reserva) de la mano de la caída de ingresos derivada de las fracasadas políticas de incentivos a la contratación laboral.

Por su parte, la desviación producida en el déficit de las CCAA durante 2015 es inseparable de tres decisiones adoptadas, en exclusiva, por el Gobierno central: rebajar el IRPF; no aplicar en plenas elecciones los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que, ahora, dicen que van a aplicar; y sobre todo, no revisar el modelo de financiación autonómica, vencido desde 2014. Las Comunidades Autónomas han visto como se reducían los ingresos con los que hacen frente a sus gastos, con el inevitable resultado de un aumento del déficit y del endeudamiento con el Gobierno central a través del FLA.

El incumplimiento, por cuarto año consecutivo, del objetivo de déficit por el Gobierno de Rajoy daña gravemente la credibilidad internacional de España y con-

El incumplimiento daña la credibilidad internacional de España y convierte en papel mojado el Presupuesto en vigor

vierte en papel mojado el Presupuesto en vigor. Y nos sitúa ante la casi certeza de que la Comisión Europea abra a España un procedimiento sancionador que incluirá una multa que deberemos pagar los ciudadanos. Todo ello evidencia la urgente necesidad de un cambio de Gobierno para conseguir tres cosas: recuperar la confianza con las autoridades europeas que permita renegociar una nueva senda de reducción del déficit acorde a nuestras posibilidades; descartar que el ajuste se vuelva a realizar sobre los gastos sociales y asegurar un incremento de ingresos públicos combatiendo el fraude sin amnistías e incrementando las aportaciones de la riqueza, las rentas del capital y los beneficios empresariales. Asuntos incluidos en el reciente Acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Ciudadanos.

Jordi Sevilla es asesor económico de Pedro Sánchez.



Luis Garicano y el diputado Toni Roldán, ayer, en el Congreso. EFE

Críticas a Montoro en todos los frentes

Ciudadanos denuncia sus «mentiras» y Podemos constata el «desastre» de la austeridad

MADRID El responsable de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos, Luis Garicano, advirtió ayer al Gobierno de que «la recuperación económica no se consolida ni ocultando el déficit, ni con trucos electoralistas». A su juicio, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «está contando la historia al revés», ya que en la última legislatura «el ajuste lo han hecho las CCAA y las administraciones locales, no el Estado». Ciudadanos lanzó ayer una campaña en Twitter para denunciar que Rajoy, «mintió» respecto a los datos del déficit de España. La formación liderada por Albert Rivera también acusa a Podemos de ser unos «irresponsables» por querer aumentar el gasto público, informa Europa Press.

Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, denunció que el desvío del déficit demuestra «el desastre de la política de Montoro». «Creo que cae el mito de que las políticas de derechas y las que patrocina el PP son más eficientes», aseveró.

El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también cargó contra Montoro y achacó el descontrol del déficit a la «oportuna» y «precipitada» reforma fiscal puesta en marcha por el Gobierno.

CEOE expresó su «preocupación» ante el desequilibrio presupuestario y advirtió de que retrasar la corrección del déficit podría perjudicar la recuperación de la actividad, de la confianza y del empleo.

ESTE DOMINGO CON EL MUNDO



ADOP
Patrocinador del Equipo Paralímpico Español

EL MUNDO